

Bogotá, octubre de 2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 12-10-2023 11:21
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0096103 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 70103 GRUPO DE PROCESOS JUDICIALES / ANGELA LORENA GUARDIOLA GRANADOS
DESTINO ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIBOLO (MAGDALENA)
ASUNTO SE LE DA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION INCOADO POR EL ALCALDE DE CHIBOLO
OBS SE LE DA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION INCOADO POR EL ALCALDE DE CHIBOLO
MAGDALENA RADICADO CON NUMERICO 2023ER0120177

2023EE0096103



Doctor

TIRZO MANUEL ARMELLA SIERRA

Alcalde de Chibolo – Magdalena

despacho@chibolo-magdalena.gov.co

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 140 DE 2023

**REF.: COBRO COACTIVO No. 0026 de 2022– EJECUTADOS:
MUNICIPIO DE CHIBOLO (MAGDALENA) Y ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.**

Cordial saludo respetado señor Alcalde,

En atención al memorial allegado a este despacho, referenciado con el número de oficio 140 del año 2023, con ocasión al proceso de cobro coactivo No. 0026 de 2022, por medio del cual presenta petición de aclaración y/o modificación referente al mandamiento de pago librado en contra del municipio de Chibolo del departamento del Magdalena; muy comedidamente nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones y precisiones:

En principio, el Honorable órgano de cierre constitucional frente a la inembargabilidad de los recursos públicos ha sido claro y preciso en su estudio, como se evidencia en las sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010, en las cuales se ha pronunciado de la siguiente manera: *"explicando que tiene sustento en la adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado"*.

Asimismo, en dichas providencias precisó la Corte que el principio de inembargabilidad no es absoluto y que, ante la necesidad de armonizar esa regla con los demás principios y derechos reconocidos por la Constitución Política, debían fijarse algunas excepciones a dicho principio, a saber (...):

"se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible".

Igualmente se tiene que, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado frente a la mencionada excepción de inembargabilidad esbozó:

"En la misma providencia C-354 de 1997, la Corte Constitucional hizo extensiva la regla de decisión señalada respecto de la excepción al principio de inembargabilidad para el pago de sentencias judiciales a aquellos créditos cuyo título consta en actos administrativos o que sean originados en las operaciones contractuales de la administración, esto es, provenientes del Estado deudor, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Para el alto tribunal tanto valor tiene el crédito reconocido en una sentencia como el que crea el propio Estado, con una particularidad y es que, en el caso de títulos ejecutivos, emitidos mediante actos administrativos la obligación debe emanar del mismo título y en el evento de que hayan sido producidos de manera manifiestamente fraudulenta, es posible su revocación por la administración."

Por lo expuesto, la inembargabilidad de los recursos públicos, lejos de ser una regla rígida del todo, es un principio flexible que cede ante las excepciones que ha desarrollado en concreto la Corte Constitucional en distintas de sus providencias, enfatizando al caso que es objeto de su petición, el supuesto de que se embargue en razón de un título emanado del Estado que reconozca una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

En este sentido, el mandamiento de pago que ha sido objeto de su solicitud fue expedido con fundamento en la resolución No. 1590 del 6 de agosto de 2020, la cual quedó en firme desde el día 11 de agosto de 2020 y que a la postre, acorde lo dispuesto en los artículos 98, 99 y 104 de la ley 1437 de 2011 y 826 del Estatuto Tributario presta mérito ejecutivo y, por consiguiente, es el sustento para expedir el respectivo mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo y sus medidas cautelares.

Asimismo, es menester indicar dentro del presente que, el Decreto 624 de marzo 30 de 1989 por medio del cual se reglamenta lo relacionado a las excepciones que se pueden presentar cuando se ha librado mandamiento de pago, de forma taxativa circunscribe o bien reduce un caso concreto a una serie de determinadas circunstancias las cuales cataloga como procedentes para controvertir el mandamiento de pago que se expida.

El artículo 831 del Decreto 624 de marzo 30 de 1989 *"Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos Administrados por la Dirección General de impuestos Nacionales"*, establece lo siguiente:

"ARTICULO 831. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

- 1. El pago efectivo.*
- 2. La existencia de acuerdo de pago.*
- 3. La de falta de ejecutorio del título.*
- 4. La pérdida de ejecutorio del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecho por autoridad competente.*
- 5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.*
- 6. La prescripción de la acción de cobro, y*
- 7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió."*

Bajo ese entendido se trae a colación que su despacho ante el mandamiento de pago, allegó solicitud de aclaración/precisión y/o modificación de este, poniendo de manifiesto que a su consideración se encuentran embargadas unas cuentas bancarias en las que reposan recursos del Sistema General de Participaciones del municipio de Chibolo – Magdalena; no obstante, no especifica cuáles ni allega constancia fidedigna de dicha aseveración, en este sentido, no existe una obligación en cabeza de quien emite la orden de embargo, de conocer de antemano qué cuentas están afectadas con estos recursos, ya que quien debe informar esta situación, es quien registra o inscriba la orden, o bien los Gerentes de los bancos, quienes a su vez deben ser informados por la entidad competente.

De otra parte, esta oficina considera que resultaría procedente aplicar la tercera causal de excepción de inembargabilidad de los recursos propios pertenecientes al municipio de Chibolo, pues reiteramos el mandamiento recae en una obligación que proviene de un título emanado del Estado que contiene una obligación clara expresa y exigible.

Embargabilidad de la tercera parte de los ingresos brutos de las entidades territoriales

Al respecto de la embargabilidad de la tercera parte de los ingresos brutos de las entidades territoriales el artículo 594 del Código General del Proceso, al que usted hace referencia señala:

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar: (...)

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales” (Negrillas por fuera del texto original)

Como se puede notar el numeral 16 del artículo 494 del CGP, establece que sólo las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales estarían amparadas por el principio de inembargabilidad, siendo entonces posible embargar hasta una tercera parte de dichos recursos.

Así las cosas, se ha dado respuesta a su solicitud en cuanto se ha aclarado el contenido del mandamiento de pago No. 026 de 4 de julio del 2023 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, acorde los fundamentos esgrimidos por su despacho. Así mismo, se enfatiza que el medio idóneo para controvertir el aludido mandamiento de pago son las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Cordialmente,



NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON

Jefe Oficina Asesora Jurídica & Jurisdicción Coactiva
Del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Elaboró:

Ángela Guardiola G
Contratista OAJ
Oficina Asesora Jurídica

Revisó:

Rodrigo Bernal M
Asesor
Oficina Asesora Jurídica